
SOBERANÍA, BIENESTAR Y PROYECTO NACIONAL*

JULIETA CAMPOS**

Parece cada día más evidente que la aplicación indiscriminada del modelo que ha prevalecido en las dos últimas décadas suscita un creciente cuestionamiento: el esquema parece atrapado en su incapacidad para dar respuesta a la superación de la pobreza y a la satisfacción de necesidades básicas de la mayoría de la humanidad. ¿Puede haber estabilidad social y política cuando sólo los ricos se hacen más ricos en medio de la pobreza generalizada? El cierre de capacidades de opción es el reverso del bienestar. La aplicación acrítica de dogmas y recetas proporcionadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no ha impedido que la desigualdad, a escala mundial, haya aumentado en proporciones sin precedentes. La participación del 20% más rico en la economía mundial había aumentado, en

1994, al 86% y la del 20% más pobre se había reducido al 1.4%. Mientras 447 personas poseen un patrimonio mayor a los mil millones de dólares, el valor de todos sus activos supera el ingreso del 50% más pobre de la población mundial.¹

Aunque, desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos consignó el derecho al bienestar, el rumbo que tomó la economía planetaria en las tres últimas décadas desplazó al bien común de la agenda de los gobiernos, para sustituirlo por la estabilidad de los mercados. Es verdad que los gobiernos no pueden dirigir los mercados mundiales, pero sí pueden reducir daños y optimizar oportunidades. Y pueden presionar para que la atmósfera macroeconómica, en escala mundial, sea más propicia a la reducción de la pobreza. Pueden actuar para

* El presente texto es un fragmento del que aparecerá, con el mismo título, en *La Soberanía de México en la Globalización. Pautas para su fortalecimiento*. (coord. Luis González Souza), edición conjunta del Instituto de Estudios para la Revolución Democrática y la Jornada Ediciones, de próxima publicación.

** Académico de la UNAM, novelista, ensayista y Presidente del Pen Club.

que la carga no caiga sobre los pobres ni se traduzca en estancamiento de las economías nacionales.

Alguien ha comparado recientemente a la economía global con una gigantesca segadora, que avanza incontenible sobre territorios ilimitados, porque no hay vallas ni fronteras que puedan oponérsele: una máquina sin conductor capaz de controlar su velocidad ni su rumbo, impulsada por el movimiento perpétuo de un desmesurado apetito y por un dinamismo en constante aceleración. Así imagina Richard Greider a ese engendro de ciencia-ficción que se ha vuelto el capitalismo contemporáneo, impulsado por los imperativos de la tercera revolución industrial. Es algo a la vez portentoso y dramático, porque lo que va dejando a su paso es, a la vez, una cosecha de prosperidad altamente concentrada y un inmenso tiradero de pobreza y marginación de millones de personas.²

En ese nuevo mapa del mundo, que se va "reordenando" de acuerdo con la lógica del libre mercado, la globalización va improvisando sin cesar una nueva geografía del poder, que desplaza en favor de la lógica global a la lógica de las economías y las políticas nacionales. Por un lado, unos cuantos dibujan la visión futurista y utópica de un "tecnoparaiso", regulado por la informática y difundido gracias al libre mercado, que abriría nuevas oportunidades de empleo para los que sean capaces de "reeducarse" y una avalancha de productos y de nuevos servicios. Pero ese prometedor espejismo

es difícilmente compartido por los que ya se anticipan perdedores y vislumbran un futuro sombrío y amenazante, donde los ganadores serían demasiado pocos, privilegiados por el conocimiento y el dinero, mientras que una perspectiva de desempleo masivo, propiciado por la creciente automatización, volvería prescindibles no sólo a las masas paupérrimas de los países pobres sino a los que alguna vez fueron trabajadores bien pagados de los países ricos. Es el cuadro que ha esbozado Jeremy Rifkin en su visión apocalíptica de El fin del trabajo.

Escapar al determinismo fatal que pretende depararnos una navegación sin timonel en las aguas turbulentas de un mar proceloso, tiene que ser por eso la preocupación central del Estado nacional, en este orden incierto donde los mecanismos de la globalización afectan la soberanía y tienden a escamotear las opciones que deben corresponder a una gobernabilidad democrática. La incertidumbre y la inseguridad prevalecen en el frágil ordenamiento que gira alrededor de un mercado enormemente vulnerable, a su vez, a factores desestabilizadores y proclives, en opinión de un número creciente de analistas, a una eventual crisis de proporciones catastróficas que podría irse agravando ante la incapacidad absoluta de consumir de grandes masas de población, en un mundo donde la tecnología permitirá producir cada vez más.

Buscar una mayor equidad en el orden global, poniendo a la gente en el centro de las decisiones, es una alternativa viable y, de hecho, la única

que garantizaría una estabilidad duradera a la economía de mercado globalizada que, como ya señalan expertos tan avisados como George Soros, no es de ninguna manera “irreversible”, como no lo es ni lo ha sido jamás ningún sistema ni institución inventado por la imaginación humana. Hay que conciliar pues, al mercado con la sociedad: hay que conciliarlo, de verdad, con la democracia.

El vertiginoso dinamismo que ha desplegado en dos décadas la nueva modalidad de producción está erosionando en los países desarrollados las conquistas del Estado benefactor y, en los países pobres que se han precipitado a disputarse las inversiones transnacionales, ha desintegrado el tejido social, ofreciendo en general muy precarias condiciones de vida a los desplazados del campo y marginando más a los que siguen viviendo en las aldeas.

Es indudable, por otra parte, que el libre flujo de capitales, productos, ganancias, información y servicios tiende a afectar de muchas maneras a la soberanía nacional. Son las instancias supranacionales, las corporaciones y el mercado financiero global los que hoy exigen rendición de cuentas a los gobiernos. Y, ante esas fuertes presiones, los gobiernos sienten que deben rendir cuentas al sistema económico global antes que a sus propios ciudadanos. La velocidad que imprimen las nuevas tecnologías al mercado financiero escapa a la regulación de esos gobiernos y han surgido nuevas prácticas legales que, más allá de las fronteras, fortalecen las ventajas de los grandes actores econó-

micos transnacionales y debilitan a los medianos y pequeños actores nacionales. Como advierte Saskia Sassen, los propios gobiernos han legitimado una nueva doctrina que les recorta su papel rector y vigilante en la economía y los orienta a propiciar sólo lo que fortalezca a la estabilidad global. Fue el caso, por ejemplo, de la crisis de diciembre de 1994, cuando en México se prefirió restaurar la confianza del mercado financiero global que reanimar, prioritariamente, a la economía mexicana.³

La hipermovilidad del capital, que busca oportunidades de ganancia a corto plazo, no favorece evidentemente las prioridades nacionales de un desarrollo económico y social a largo plazo. El consenso globalizador se ha olvidado de que el derecho al bienestar es una condición esencial de la democracia. A cada nación le corresponde, cada día, recordarlo y reclamarlo. La consolidación interna del estado de derecho y de la transparencia electoral contribuye, sin duda, a favorecer que pesen más los votos ciudadanos que los votos “golondrinos” de las inversiones nómadas. Es un hecho que el fortalecimiento de la democracia fortalece al Estado nacional y lo habilita mejor para defender, con convicción y dignidad, el derecho de sus ciudadanos a participar en la actividad productiva y su acceso a la educación, la salud, la seguridad social, una vivienda decorosa y, por supuesto, la cultura.

Es un desafío que el Estado mexicano tiene que asumir porque en ello va en juego la sobrevivencia. Esa abstracción que llamamos “la globalidad”

es una especie de Frankenstein que despliega sus poderes, su fuerza y sus movimientos con una autonomía y una anarquía que no admite, al parecer, controles ni límites. Las dimensiones mundiales del fenómeno que ha desencadenado la tercera revolución industrial potencia enormemente los efectos de desigualdad y empobrecimiento que generó la primera. Hoy estamos expuestos, como nunca antes, a eso que George Soros ha llamado “la expansión salvaje de los mecanismos del mercado.” Porque, paradójicamente, ese gurú de las finanzas, que desfondó un día al Banco de Inglaterra, hace una de las críticas más agudas al peligroso predominio de los mecanismos del mercado sobre los valores de la sociedad y advierte: “No creo que la competencia conduzca automáticamente a una mejor distribución de los recursos. No considero que la supervivencia del más fuerte sea un objetivo deseable. Hay que luchar por ciertos valores fundamentales, empujando por la justicia social, que no pueden salvaguardarse en el marco de una competencia desenfrenada.”⁴

Si el establecimiento de regulaciones internacionales a los mercados

acabará por ser, probablemente, una medida de autosalvamento que las instituciones internacionales van a tener que adoptar (opinan Soros y Felipe González) el compromiso de responsabilidad con el bien común es algo que, tras muchos años de destrozos atribuibles a los recetarios en uso, ya no admite aplazamientos. En México, un gobierno convencido de que esa función es indeclinable y consciente de dónde está el interés nacional, no podrá ya recurrir a la socorrida expresión “no hay de otra” sino que buscará abrir el espacio soberano de decisión en todo lo que atañe al bienestar de las mayorías.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

- ¹ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo *Informe de Desarrollo Humano* 1997. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, p. 124.
- ² Richard Greider, *One World, ready or not*, Nueva York: Simon & Shuster, 1997. p. 11,
- ³ Saskia Sassen, *Losing control*, Nueva York: Columbia University Press, 1996, p. 52ss.
- ⁴ George Soros, *Le défi de l'argent*, París: Plon, 1995, p. 23.